

Bancos Públicos + Agua Pública = ODS 6? ♦

Public Banks + Public Water = SDG 6?

David A. McDonald *

Thomas Marois **

Susan Spronk ***

Resumen

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 pretende lograr el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento para 2030; se espera que esto cueste un estimado de US\$150 mil millones por año. ¿De dónde saldrán estos fondos? Una posibilidad es la financiación privada en forma de inversión directa de capital de empresas privadas de agua y préstamos de bancos comerciales. Sin embargo, la evidencia sugiere que las inversiones privadas en agua y saneamiento no se han materializado según lo planeado debido al perfil de riesgo-rendimiento del sector. El agua y el saneamiento son considerados "demasiado arriesgados" por los inversionistas privados y los rendimientos no son lo suficientemente gratificantes. Una alternativa que puede ayudar a cubrir el déficit de financiación del abastecimiento de agua y el saneamiento (WSS, por sus siglas en inglés) es una fuente de financiamiento pública aún sin explotar: los bancos públicos. Hay más de 900 bancos públicos en el mundo, con 49 billones de dólares estadounidenses en activos; sin embargo, han sido subestimados en gran medida como una fuente importante de financiamiento para el agua y el saneamiento y también han sido descuidados por la investigación académica y por las principales organizaciones políticas, como el Banco Mundial. Es necesario comprender

♦ Una versión previa en el idioma inglés aparece en McDonald, D.A., Marois, T. and Spronk, S. [2021]. 'Public Banks + Public Water = SDG 6?'. *Water Alternatives*, 14(1): 117-134. [open access journal]: www.water-alternatives.org Traducción del inglés al español por Jesús Sosa, revisión Wesley Marshall.

* Global Development Studies, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada

** Public Banking Project, Department of Political Science, McMaster University, Canada. Formerly Department of Development Studies, SOAS, University of London, London, UK

*** School of International Development and Global Studies, University of Ottawa, Canada.

mejor cómo se puede movilizar a los bancos públicos como financiadores eficaces del agua pública. En este artículo ofrecemos una breve historia de las prácticas de la banca pública en el sector del agua, revisamos sus pros y sus contras, y discutimos la importancia de la aparición de un nuevo tipo de operador público de agua y el potencial que estas entidades ofrecen para financiar en este sector.

Palabras clave: Bancos públicos, agua pública, finanzas, ODS, remunicipalización.

Abstract

Sustainable Development Goal 6 aims to achieve universal access to water and sanitation services by 2030; this is expected to cost an estimated US\$150 billion per year. Where will this funding come from? One possibility is private finance in the form of direct equity investment from private water companies and lending from commercial banks. Evidence suggests, however, that private investments in water and sanitation have not materialized as planned due to the sector's risk – return profile. Water and sanitation are considered 'too risky' by private investors and returns insufficiently rewarding. One alternative that may help to fill the water supply and sanitation (WSS) funding gap is an as yet untapped source of public finance: public banks. There are over 900 public banks in the world, with US\$49 trillion in assets; they have, however, been largely underestimated as an important source of water and sanitation funding and have also been neglected by academic research and by mainstream policy organizations such as the World Bank. There is a need to better understand how public banks can be mobilized as effective funders of public water. In this article we provide a brief history of public banking practices in the water sector, review their pros and cons, and discuss the significance of the emergence of a new type of public water operator and the potential these entities offer for financing in this sector.

Keywords: Public banks, public water, finance, SDGs, remunicipalisation.

Introducción

Está claro que el mundo no alcanzará los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin un cambio fundamental en el sistema financiero internacional.

UN Secretary-General Guterres [IATF, 2019: iii]

Es necesario replantearse cómo se financian los servicios esenciales y la infraestructura. Tal vez en ningún lugar esto sea más urgente que en la provisión de acceso universal al abastecimiento de agua y el saneamiento (WSS), uno de los desafíos más importantes y de larga data del mundo. Casi 2.1 millones de personas carecen de acceso a agua segura y fácilmente disponible en el hogar, y 4.5 millones de personas carecen de saneamiento gestionado de forma segura [WHO/UNICEF, 2017]. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6) pretende subsanar estas deficiencias.

Será un emprendimiento costoso. Se espera que el cumplimiento de las metas 6.1 (acceso universal y equitativo al agua potable segura y asequible) y 6.2 (saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos) cueste unos 150 mil millones de dólares al año [Banco Mundial, 2017: 52]. Costará considerablemente más cumplir con las metas adicionales del ODS 6, como la reducción de la contaminación del agua, la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos y la protección de los ecosistemas relacionados con el agua; se estima que las necesidades totales de desarrollo de infraestructura mundial de WSS requerirán US\$6.7 billones para 2030 y US\$22.6 billones para 2050 [Ajami *et al.*, 2018: 5]. Las necesidades más apremiantes se encuentran en el Sur Global, pero los países de altos ingresos también se encuentran en graves situaciones de déficit [Hutton, 2016]; Estados Unidos, por ejemplo, requiere un estimado de US\$1 billón en inversión en WSS durante los próximos 20 años [Tiemann, 2017: 9].

La COVID-19 ha puesto aún más de relieve la urgencia de ampliar los servicios de agua seguros y asequibles. El 23 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el “suministro de agua potable (...) es esencial para proteger la salud humana durante todos los brotes de enfermedades infecciosas”, incluida la COVID-19 [WHO, 2020]. La pandemia y sus consecuencias económicas también han contribuido a una crisis de liquidez para muchos operadores públicos de agua debido a la caída de los ingresos y el aumento de los costes, lo que subraya la necesidad urgente de apoyo financiero. Según el Banco Mundial [2020: 4], encontrar los recursos para financiar los servicios públicos de agua es “una de las acciones más importantes que los responsables políticos pueden tomar en respuesta a la crisis de la COVID-19”.

Por supuesto, el aumento del financiamiento por sí solo no resolverá estos problemas de infraestructura de las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, pero es innegable la necesidad de una cantidad masiva de nuevos fondos para las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, especialmente en los países de ingresos medios y bajos, donde el gasto tendrá que ser “de 2 a 5 veces mayor que la práctica actual” [Alaerts, 2019: 2].

¿De dónde saldrá todo este dinero? Este artículo investiga una fuente de financiamiento que ha sido descuidada en la literatura: los bancos públicos. Si bien los bancos públicos desempeñaron un papel importante en el desarrollo de la infraestructura esencial en los siglos XIX y XX, cayeron en desgracia con la agenda a favor de la privatización de la década de 1990. A medida que más y más gobiernos vuelven a soluciones centradas en el Estado en la economía posterior a 2008, los bancos públicos están resurgiendo; sin embargo, sabemos relativamente poco sobre su papel en el financiamiento de los servicios de agua y saneamiento. Este documento tiene como objetivo ayudar a llenar ese vacío, señalando su potencial como fuente de financiamiento infrautilizada para los servicios de agua y saneamiento.

El documento procede de la siguiente manera. En primer lugar, revisamos la literatura disponible sobre el financiamiento de los servicios de agua y saneamiento, argumentando que las fuentes de inversión existentes (empresas privadas de agua, bancos privados y financiamiento oficial para el desarrollo) simplemente no están ocurriendo a la escala o el ritmo requeridos y es poco probable que lo hagan en un futuro cercano. En segundo lugar, el documento evalúa el potencial de los bancos públicos para cubrir el déficit financiero, proporcionando una breve historia de las prácticas de la banca pública en el sector del agua. En tercer lugar, revisamos los beneficios potenciales de los bancos públicos en el financiamiento de WSS, discutimos la importancia del surgimiento de un nuevo tipo de operador de agua “público” y consideramos los desafíos que estas entidades plantean para los bancos públicos a medida que los ciudadanos exigen una mejor rendición de cuentas, participación, transparencia, equidad y sostenibilidad. Concluimos con una breve discusión sobre la necesidad de futuras investigaciones sobre los bancos públicos en relación con el agua y el saneamiento.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO (WSS)

Una de las principales razones para la privatización del agua ha sido durante mucho tiempo que, en lugares donde la financiación pública es inadecuada, las empresas privadas de agua tienen grandes sumas de financiamiento disponibles para invertir en la infraestructura de agua y saneamiento ambiental que tanto se necesita. Sobre el papel esto es cierto; por ejemplo, Veolia, la multinacional francesa, tuvo ingresos de 24.4 mil millones de euros (bn) en 2016, con activos de 37.9 mil millones de euros, capital de 7.6 mil millones de euros y más de 163 mil empleados [Veolia, 2016], lo que la convierte en una empresa más grande que casi la mitad de los países del mundo. Las empresas privadas de agua también están proporcionando agua y saneamiento a un

número cada vez mayor de personas en todo el mundo, y la población total que es “atendida en cierta medida por contratos del sector privado” ha crecido de 335 millones en 2000, a 971 millones en 2012, a 1.1 mil millones en 2015 [Arup, 2015: 5].

Dado que la desinversión total es poco común en el sector de las aguas y servicios, la gran mayoría de la participación del sector privado se realiza en forma de asociaciones público-privadas (APP); a nivel mundial, entre 1987 y 2015, se han firmado más de mil novecientos grandes acuerdos de APP en el sector del agua [ibid.], además de una gran cantidad de contratos de menor escala para acuerdos a corto plazo. Debido a que cada acuerdo tiene sus propios términos de referencia únicos, es difícil saber definitivamente qué parte es responsable de qué tipo de inversión.

Por lo tanto, reunir esta información dispersa en una compilación fiable es prácticamente imposible, y esto se ve agravado por el hecho de que muchos contratos no están (plenamente) disponibles para el público.

Además, un número creciente de APP no significa necesariamente un aumento del gasto del sector privado en infraestructura; de hecho, podría decirse que el “cambio hacia modelos de APP más 'ligeros en activos' y menos intensivos en capital” significa que ahora se está gastando menos dinero privado que en fases anteriores de participación del sector privado [WWC y OCDE, 2015: 9]. Puede haber más contratos privados en el sector del agua hoy que hace 30 años, pero el gasto de capital se ha convertido en responsabilidad del sector público, mientras que las empresas privadas se centran en los gastos operativos.

La inversión en agua y saneamiento por parte de las empresas privadas de agua también está muy sesgada geográficamente. En el extremo superior se encuentran Inglaterra y Gales, con un 100% de entrega del sector privado, Francia con un 67% de su WSS entregada por el sector privado y España con un 63%. La

prestación de servicios de agua y saneamiento por parte del sector privado ha aumentado en China y Brasil, pero en la mayoría de los países del mundo el agua y el saneamiento siguen siendo proporcionados predominantemente por organismos públicos. En Estados Unidos solo el 15% del agua es suministrada por empresas privadas, mientras que en Alemania el 12% es privada y en Italia es el 11% [Arup, 2015: 38]. La mayoría de los países de bajos ingresos son atendidos predominantemente por agencias públicas de agua, y las empresas privadas de agua muestran poco interés en servir a estos mercados y muestran "una mayor selectividad (...) en sus aventuras en el extranjero" [WWC y OCDE, 2015: 9]. Al final, las APP solo desempeñan un papel periférico en las inversiones de capital en el sector del agua y "luchan por proporcionar más que una pequeña parte de la inversión en infraestructura en el mundo" [Hall, 2015: 10].

Bancos Privados

¿Pueden los bancos privados proporcionar el financiamiento necesario? A mediados de 2020, había más de treinta y un mil bancos privados en el mundo con más de 230 billones de dólares en activos combinados [Orbis 2020]; los más grandes son Mitsubishi Group, HSBC y JPMorgan Chase, que en conjunto administran activos por poco más de \$8.2 billones de dólares. Sin embargo, los bancos privados no son particularmente transparentes sobre sus actividades en el sector del agua; si bien hay casos de bancos que anuncian iniciativas de responsabilidad social de las empresas (como el préstamo de 5 millones de dólares a interés cero del Bank of America al programa de WaterEquity sobre servicios de agua y saneamiento en Asia), los montos de capital involucrados son relativamente menores [Bank of America, s.f.].

Como resultado de esta falta de transparencia, se sabe poco sobre los volúmenes o prácticas reales de financiamiento, aunque en general se entiende que los préstamos de la banca privada para WSS son extremadamente bajos y han "disminuido notablemente"

desde la crisis financiera de 2008 [WWC y OCDE, 2015: 27]. Algunos bancos privados “han abandonado por completo el financiamiento de proyectos [de WSS]; los que quedan lo han encontrado menos rentable y sus clientes lo están encontrando más caro” [ibid.]. La financiarización ha exacerbado la tendencia, ya que casi cuatro décadas de liberalización financiera han abierto un mercado mundial de oportunidades a corto plazo y de alto rendimiento en el que los bancos privados pueden invertir [Mazzucato, 2018]. En el sector del agua, por el contrario, se percibe una “escasez de proyectos 'financiables' y de empresas e instituciones solventes en materia de agua” [WWC y OCDE, 2015: 54].

Además, los bancos privados sólo prestan a los proveedores de servicios de abastecimiento de agua y saneamiento que tienen un superávit de caja fiable con el que pagar los costes de financiamiento; sin embargo, muchos operadores de WSS, incluidos los de países de altos ingresos, no cubren sus gastos operativos. En los países de bajos ingresos, el problema es endémico, ya que solo el 15% de las empresas de servicios públicos igualan los gastos operativos o generan un superávit de efectivo [Banco Mundial y UNICEF, 2017: 14]; en pocas palabras, muchos operadores públicos de agua no pueden pagar sus préstamos con sus propios ingresos. Debido a la naturaleza altamente localizada de los servicios de WSS, muchos operadores de agua también atienden a poblaciones pequeñas y dispersas. Como resultado, “las necesidades individuales de inversión a menudo no son lo suficientemente grandes como para atraer a los bancos privados, excepto a altas tasas de interés, y son demasiado pequeñas para que los préstamos en los mercados de capitales sean rentables” [Leigland *et al.*, 2016: 3]; esto es particularmente cierto en las zonas rurales, donde los operadores de agua pueden abastecer solo a unos pocos miles de personas [Cotruvo *et al.*, 2018].

Los plazos también son motivo de preocupación, ya que los bancos privados y los operadores públicos de agua están en gran medida fuera de sincronía y con los financieros, en general, conservan el poder para establecer los términos y condiciones [Bracking, 2016]. Los bancos quieren “mantener su capacidad de cambiar rápidamente hacia diferentes inversiones manteniendo cortos los vencimientos de los préstamos bancarios, especialmente si no están seguros de la solvencia de sus deudores (...). Por el contrario, los prestatarios de servicios públicos de agua tienen la prioridad opuesta” [Leigland *et al.*, 2016: 3-4].

Los bancos también pueden carecer de la experiencia necesaria para evaluar con precisión los proyectos de agua. La investigación muestra que los bancos privados en el sector del agua “tienden a tratar a las empresas de servicios públicos y otros proveedores de servicios de agua como un subconjunto de los préstamos comerciales normales, y ofrecen solo préstamos caros a corto plazo (1-3 años)” [ibid.: 7]. Este desajuste de prioridades ha contribuido a una "falta de comprensión del sector del agua" por parte de los bancos privados, particularmente en los países del Sur Global [ibid.: 6]. Según un estudio, “la industria financiera y el sector del agua son comunidades epistémicas bastante separadas con un lenguaje, intereses y procedimientos diferentes” [Alaerts, 2019: 130].

Financiamiento oficial para el desarrollo

El financiamiento oficial para el desarrollo (ODF, por sus siglas en inglés) se refiere a los préstamos y donaciones de organismos bilaterales y multilaterales de propiedad y control público, como USAID y el Banco Asiático de Desarrollo. Aunque el ODF para agua y saneamiento aumentó de una asignación anual de solo US\$6 mil millones en 2003 a más de US\$18 mil millones en 2014 [Kolker *et al.*, 2016: 2; Ajami *et al.*, 2018: 19], el ODF sigue siendo una parte menor del presupuesto de WSS de la mayoría de los países. La financiación oficial para el desarrollo para el

abastecimiento de agua y el saneamiento también está “aumentando mucho más lentamente que para otros sectores” [Alaerts, 2019: 8]; esto es cierto a pesar de que en algunos países puede ser crítico, como en Haití, donde “la comunidad de donantes financia todas las inversiones en agua y saneamiento y el 30 por ciento de los gastos operativos del sector” [Banco Mundial, 2017: 53-4].

La mayor parte de la financiación del ODF relacionada con el WSS también se canaliza a través de organismos multilaterales, en particular el Grupo del Banco Mundial [Kolker *et al.*, 2016: 3], y la Práctica Mundial del Agua del Banco Mundial gestiona una cartera de préstamos que incluye “177 proyectos por un total de 24.5 mil millones de dólares, lo que representa alrededor del 11 % del total de préstamos del Banco Mundial” [Banco Mundial, 2017: 53]. Esto es importante porque permite a las instituciones financieras internacionales (IFI), especialmente al Banco Mundial, actuar como guardianes de la política de WSS. Aunque las IFI pueden ser “una fuente menor [de financiación del WSS] en términos absolutos, tienen una influencia desproporcionada [en la política del WSS] a través de su efecto 'halo' en otros prestamistas” [WWC y OCDE, 2015: 20]. Estas instituciones multilaterales cuentan con enormes recursos para publicaciones y conferencias, así como para brindar asesoramiento en el sector del agua; sin embargo, en lugar de aprovechar esta posición de autoridad para promover opciones de financiamiento público, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales han utilizado este poder para promover el financiamiento privado, en parte a través del uso continuo de condicionalidades favorables a la privatización en sus préstamos al sector de agua y saneamiento, con más del 70% del financiamiento de las IFI en agua y saneamiento en forma de préstamos condicionales [Kolker *et al.*, 2016: 2].

Habiendo reconocido estos desafíos, organizaciones internacionales como el Banco Mundial han estado promoviendo políticas de

“financiamiento combinado”, es decir, “el uso estratégico de impuestos públicos, donaciones para el desarrollo y préstamos concesionales para movilizar flujos de capital privado” [Banco Mundial y UNICEF, 2017: vii]. El financiamiento combinado es ahora la pieza central de la agenda de los ODS del Banco Mundial de “miles de millones a billones” y su estrategia conexas “Maximizar el financiamiento para el desarrollo”; a pesar de que el énfasis se ha puesto en los mercados emergentes y fronterizos donde las inversiones privadas son más bajas, aquí se pueden encontrar incentivos públicos para el financiamiento privado en prácticamente todas las partes del mundo.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre el Financiamiento para el Desarrollo escribe que, “al trasladar parte del riesgo o el costo de un proyecto del sector privado al público, el financiamiento mixto puede mejorar los perfiles de riesgo-rendimiento para los acreedores o inversores privados” [IATF, 2019: 86]. Los objetivos son “movilizar fondos adicionales para el sector y reducir los costos de endeudamiento en comparación con un acuerdo totalmente comercial” [ibid.]. En el sector del agua, se argumenta que este tipo de financiamiento mixto “ayudará a superar las limitaciones políticas y/o de asequibilidad de los préstamos (...) [y] puede crear nuevas relaciones y oportunidades entre los sectores del agua y financiero, lo que puede promover el objetivo a largo plazo de aumentar el financiamiento comercial” [Banco Mundial y UNICEF, 2017: vii]. No hay nada particularmente original en este modelo, aunque hay nuevos actores y nuevos vehículos de financiamiento, como la ‘fintech’ basada en la web, así como mandatos sociales ampliados, como el financiamiento verde; también hay un mayor énfasis en los microcréditos, particularmente en los países de bajos ingresos [Advani, 2016; Ikeda y Liffiton, 2019; Asian Development Bank, 2017; Banco Mundial y UNICEF, 2017].

Dejando a un lado la novedad, la evidencia sugiere que el financiamiento mixto está teniendo poco impacto en el WSS, particularmente en los países a los que más se dirige.

Hasta la fecha, el financiamiento mixto en las economías en desarrollo no se ha utilizado ampliamente a gran escala en el sector del agua. Algunas experiencias aisladas han sido apoyadas por donantes internacionales, pero en su mayoría se han producido en países de ingresos medios y hasta ahora no se han podido replicar a gran escala [Leigland *et al.*, 2016: 4].

La mayor parte del financiamiento mixto fluye hacia un pequeño grupo de países de ingresos medianos, como Turquía, Nigeria, India, Brasil y China, y gran parte de ella se concentra en sectores muy rentables, como los servicios financieros y la energía. Solo el 2% de este monto se asigna a proyectos WSS [IFC, 2017; Benn *et al.*, 2017]. Los datos del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre el Financiamiento al Desarrollo refuerzan estas afirmaciones; muestran que los flujos hacia los países de ingresos medios son casi diez veces mayores que los que tiene destino hacia los países de ingresos más bajos y los países menos adelantados, mientras que solo el 7% de la financiación combinada en materia de agua está alineada con el ODS 6, ya que "la mayoría de los acuerdos combinados se concentran en sectores con un potencial significativo de rentabilidad económica" [IATF, 2019: 87-88].

Al igual que otras formas de financiación privada, el mediocre desempeño del financiamiento mixto demuestra los enormes desafíos de tratar de atraer capital privado al sector del agua y el saneamiento, incluso con "comodidades de diversa índole" [WWC y OCDE, 2015: 58], en particular dado el volumen de inversión necesario para alcanzar los ODS en agua y saneamiento [WWC y OCDE, 2015: 58; Meeks, 2017].

Es poco probable que el financiamiento del sector privado se materialice.

Por lo tanto, el financiamiento del sector privado para el abastecimiento de agua y saneamiento está muy por debajo de las cantidades que esperaban sus proponentes. Un estudio reciente concluyó que, si bien las organizaciones internacionales siguen reclamando una mayor actividad de los inversionistas, en promedio “el financiamiento del sector privado para el agua ha seguido siendo menor” [Alaerts, 2019: 8]. Si bien es importante en algunos países de ingresos altos, como Francia y el Reino Unido, el financiamiento privado no parece ser capaz de satisfacer las necesidades financieras del ODS 6. Esto parece particularmente cierto en el Sur Global, donde la investigación sugiere que el financiamiento del sector privado representa solo “el 7 por ciento del gasto total en agua y saneamiento”; en el África subsahariana, la cantidad es inferior al 1% [Leigland *et al.*, 2016: 4].

La investigación del Banco Mundial confirma estas conclusiones. Un estudio de 2015 reveló que, a nivel mundial, el sector de agua y saneamiento representaba solo el 4% del gasto total en infraestructuras del sector privado; esto ascendió a solo 4.1 mil millones de dólares, y la mayor parte se gastó en China y Brasil [Kolker *et al.*, 2016: 3; *cf.* Wu *et al.*, 2016]. El Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre el Financiamiento para el Desarrollo Sostenible (el organismo encargado de abordar las necesidades de financiación de los ODS 2030) señala, además, que la inversión del sector privado parece estar disminuyendo y está “muy por debajo del máximo alcanzado en 2012” [IATF, 2019: 61]. El Banco Mundial llega a la conclusión aleccionadora de que para la mayoría de los operadores públicos de agua, “el financiamiento privado es casi inexistente” [Kolker *et al.*, 2016: 1].

¿Por qué no se ha materializado el nivel esperado de financiamiento privado? Las razones son varias, y se refieren a las barreras estructurales que impiden el aumento de la inversión del sector privado en los servicios de agua. Gran parte de esta aversión se debe a consideraciones de riesgo-rendimiento. Las expectativas

iniciales de altos rendimientos y de billones de dólares de ingresos potenciales se evaporaron rápidamente en todos los países, excepto en los más ricos, o en lugares donde se habían negociado tasas de ganancia garantizadas [Bakker, 2010]. Hoy en día, los bajos niveles de recuperación de costos y los desafíos políticos de cobrar los pagos de los hogares de bajos ingresos han significado que muchas empresas privadas de agua han reducido sus actividades en lugares de riesgo, han cambiado de táctica para centrarse en nichos de mercado y servicios de mayor valor agregado (como la desalinización) o simplemente se han retirado por completo de los contratos que pierden dinero [Bauby, 2014]. Desde la perspectiva de los inversores privados, esto tiene sentido; su cometido no es maximizar los bienes públicos para la comunidad, sino mantener y aumentar los rendimientos privados para sus accionistas [cf. Lazonick y Shin, 2020].

La reacción política contra la privatización del agua también puede ayudar a explicar por qué las empresas privadas de agua y los financieros han reducido su exposición financiera en el sector; las protestas generalizadas y a menudo violentas han servido para erosionar los rendimientos esperados (y mancillar la reputación) de muchas empresas privadas de agua [Spronk, 2007; Castro, 2008; Barlow y Clarke, 2017]. La creciente tendencia hacia la remunicipalización de los servicios de agua (es decir, hacerlos públicos después de un período de prestación por parte del sector privado) ha creado preocupaciones adicionales en el mercado privado del agua, especialmente después de que ciudades de alto perfil como París hicieran públicos sus servicios de agua una vez más (con las multinacionales francesas Veolia y Suez perdiendo estos contratos dentro de Francia) [Le Strat, 2014; Valdovinos, 2012]. Hasta ahora, las empresas privadas de agua han guardado un relativo silencio al respecto, pero hay indicios de que están cada vez más preocupadas por lo que significa la remunicipalización para su futuro [McDonald, 2019; Umler y Gerlak, 2019].

Con una creciente reacción política y una difícil perspectiva de riesgo-rendimiento, no es de extrañar que las empresas privadas de agua no estén dispuestas a invertir más en un sector con oportunidades cada vez menores para recuperar los costos y con amenazas políticas a su propia existencia. Estas realidades hablan de las “serias limitaciones estructurales” de depender del capital privado para financiar las necesidades de WSS [Leigland *et al.*, 2016: 2]. La mayoría de los inversores privados “[ven] el agua como un riesgo financiero” y, por esa razón, no han invertido en el sector [Jägerskog *et al.*, 2016].

Como resultado, la gran mayoría del financiamiento de WSS sigue proviniendo del sector público; las finanzas públicas “siguen siendo el modelo abrumadoramente predominante en todo el mundo, ya que representan más del 90 por ciento de la inversión en infraestructura” [Hall, 2015: 10]. Así lo afirma el Banco Mundial, al señalar que “los servicios sostenibles y equitativos dependerán de una inversión pública sustancial” [2017: 51]. Según el Panel de Alto Nivel sobre el Agua (convocado por el Consejo Mundial del Agua y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE), “el dinero privado rara vez puede sustituir completamente al financiamiento privado en las grandes infraestructuras hídricas: en la mayoría de los casos, solo puede ser un socio menor, e incluso entonces necesitará comodidades de diversos tipos” [WWC y OCDE, 2015: 58]. Es una práctica común que el agua y el saneamiento se “financien en gran medida con recursos nacionales, principalmente con el pago de tarifas por parte de los usuarios y las finanzas públicas derivadas de los impuestos” [Bartram *et al.*, 2018: 3]. Como se concluye de una encuesta de la Organización de las Naciones Unidas realizada en 25 países, el 90% de los presupuestos de agua provienen de una combinación de recuperación de costos de los consumidores y gasto público; solo el 8% proviene de financiación reembolsable y el 2% de fuentes externas [GLAAS, 2017].

Aun así, la gran mayoría de la literatura académica y política sobre el financiamiento de WSS sigue centrándose en el sector privado. Aunque consciente del predominio de la financiamiento público, el Banco Mundial insiste en que es “esencial movilizar financiamiento inicial de fuentes privadas o comerciales” [Leigland *et al.*, 2016: 1]. Este énfasis en las soluciones financieras privadas también se refleja en general en la literatura sobre finanzas e infraestructura. Un estudio exhaustivo de la literatura reveló que más del 75% de las publicaciones escritas sobre el tema entre 1989 y 2015 se centraron en la financiación del sector privado de diversos tipos, mientras que solo el 5% examinó la inversión pública [Kumari y Sharma, 2017]. Es evidente que se necesita más investigación sobre las posibles fuentes públicas de financiamiento.

¿LOS BANCOS PÚBLICOS AL RESCATE?

Dada la renuencia de las entidades privadas a invertir en WSS, ¿existen otras fuentes de fondos públicos que podrían ayudar a los gobiernos y a los operadores de agua con sus crecientes necesidades financieras? En esta sección del artículo analizamos a los bancos públicos como posibles fuentes alternativas.

Los bancos públicos son instituciones financieras bajo la propiedad y control del Estado o alguna otra entidad pública, regidas por el derecho público, o que funcionan de acuerdo con un mandato público; operan a nivel municipal, nacional e incluso internacional [Schmit *et al.*, 2011; OMFIF, 2017]. Los bancos públicos funcionan de acuerdo con diferentes lógicas y bajo diferentes mandatos. Hay bancos públicos que son altamente comercializados y neoliberales en su orientación, con mandatos explícitos de maximización de beneficios [como los bancos públicos universales en Turquía; véase Yalman *et al.*, 2018]. Hay otros para los que los beneficios son secundarios al desarrollo y que apoyan la provisión de financiamiento más “paciente” (como

en el caso de varios bancos públicos brasileños, indios y alemanes; véase Scherrer, [2017]). Otros tienen mandatos que ponen los rendimientos sociales a la par de los financieros (como el Banco Popular de Costa Rica o el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa).

Es importante reconocer esta diversidad. Hasta la fecha, la literatura económica ha tendido a conceptualizar a los bancos en términos claros de “público versus privado”. Los puntos de vista “políticos” neoclásicos argumentan que los bancos públicos persisten porque los políticos los usan para beneficio personal; argumentan que “los burócratas hacen malos banqueros” [La Porta *et al.*, 2002; Barth *et al.*, 2006; Demirgüç-Kunt y Servén, 2010; Calomiris y Haber, 2014]. Por el contrario, las visiones keynesianas del “desarrollo” sostienen que los bancos públicos persisten porque están destinados a llenar las brechas de financiamiento en los préstamos del sector privado a proyectos para el bien público socialmente significativos pero de bajo rendimiento, especialmente infraestructura [Griffith-Jones y Ocampo, 2018; Naqvi *et al.*, 2018].

Los argumentos en torno a la eficiencia de los bancos públicos también están divididos. Los estudios de caso neoclásicos y la investigación cuantitativa a gran escala concluyen que los bancos públicos generan ineficiencias económicas, subdesarrollo y corrupción [La Porta *et al.*, 2002; Cull *et al.*, 2017]; mientras que, los estudios de casos heterodoxos y la investigación cuantitativa a gran escala concluyen lo contrario, a saber, que los bancos públicos facilitan la estabilización económica, participan en préstamos anticíclicos en tiempos de crisis y se asocian con tasas de crecimiento promedio más altas en las economías nacionales [Andrianova *et al.*, 2012; Griffith-Jones y Ocampo, 2018]. Desde ambos puntos de vista, sin embargo, la “propiedad” pública es un determinante primario y fijo de la función institucional; es decir, la forma de propiedad precede a la función institucional.

Nuestro marco conceptual es diferente. No es la propiedad pública, *per se*, la que determina el funcionamiento de los bancos públicos; en su lugar, invertimos la causalidad, centrándonos primero en cómo las funciones institucionales dan forma y remodelan las actividades de los bancos públicos [Marois y Güngen, 2016; Marois, en prensa]. En esta visión “dinámica” alternativa de los bancos públicos, la atención se centra en lo que hacen los bancos públicos, cómo funcionan y por qué. Esta conceptualización no se basa en nociones fijas de lo público frente a lo privado; más bien, nos permite excavar información que de otro modo sería invisible sobre las relaciones causales entre los diferentes tipos de bancos públicos, fuentes de financiamiento y estructuras de gobernanza, en relación con la forma en que los bancos públicos específicos y las autoridades públicas del agua gestionan (o no gestionan) concretamente las compensaciones entre ser “financiables” y permitir un acceso equitativo. La atención se centra en cómo funcionan los bancos públicos en contextos socioeconómicos concretos, no abstractos.

Esta reconceptualización de los bancos públicos es fundamental si queremos entender su alcance y variedad potenciales. También es importante verlos en relación con otras fuentes de financiación y darse cuenta de que los bancos públicos pueden desempeñar un papel mucho más importante en la economía mundial de lo que comúnmente se reconoce. A mediados de 2020, se estimaba que había 910 bancos públicos en todo el mundo (excluyendo los bancos centrales y multilaterales); en conjunto, poseían 48.71 billones de dólares en activos [Orbis 2020].¹ En total, los bancos públicos representan alrededor del 17% de los recursos bancarios

¹ En concreto, los datos se refieren a las siguientes especializaciones financieras designadas por Orbis: bancos comerciales, cajas de ahorro, bancos cooperativos, bancos inmobiliarios e hipotecarios, bancos de inversión, bancos islámicos, otras instituciones de crédito no bancarias, instituciones de crédito gubernamentales especializadas, instituciones de microfinanzas y empresas de banca privada y gestión de activos.

mundiales, lo que equivale a alrededor del 34% del PIB mundial de 2019.

No hay sector financiero con activos tan importantes de los que sepamos tan poco. Sin embargo, hay un resurgimiento del interés en los bancos públicos desde su papel fundamental en la superación de la crisis financiera mundial de 2008. Muchos académicos, organizaciones no gubernamentales, activistas y responsables políticos han llegado a ver a los bancos públicos como instituciones catalizadoras capaces de hacer frente a los principales retos sociales, como el cambio climático [Mazzucato y Semieniuk, 2017; Brown, 2019; Steinfort y Kishimoto, 2019; Berry y Macfarlane, 2019; UNCTAD, 2019]. También es importante señalar que los bancos públicos, como todas las empresas públicas, se vieron arrastrados por la campaña de privatización neoliberal posterior a la década de 1980, y su razón de ser (*raison d'être*) se cuestionó fundamentalmente a la luz del fundamentalismo de mercado [Barth *et al.*, 2006]. Muchos bancos públicos desaparecieron, y sus activos totales cayeron de alrededor del 40% de los recursos bancarios mundiales al 17% actual (aunque estas cifras son relativas, dado que los activos totales de la banca privada han crecido fenomenalmente con la liberalización financiera posterior a la década de 1980). Sin embargo, los bancos públicos han persistido y las autoridades gubernamentales de todo el mundo han comenzado a crear otros nuevos. *Finance in Common* (una red mundial de bancos públicos de desarrollo que celebrará su primera cumbre a finales de 2020 en el marco del Foro de París sobre la Paz) ha identificado 450 bancos públicos de desarrollo; de ellas, el 30 por ciento se fundaron desde el año 2000 [FiC, 2020], y siguen creciendo en tamaño y número [de Luna-Martínez *et al.*, 2018; Griffith-Jones y Ocampo, 2018; UNCTAD, 2019].

Alemania, por ejemplo, ha establecido al menos nueve nuevos bancos regionales de desarrollo en los últimos años. En 2012, Francia creó BPI France (Banque publique d'investissement) y en

2013 creó SFIL[§] (Apoyo a la inversión local y las exportaciones). En 2017 se creó el Banco de Infraestructura de Canadá y, en 2009, se creó el Banco PT Sarana Multi Infrastruktur en Indonesia. En 2013 se creó el Banco de Desarrollo de Nigeria y, en 2018, el Banco Territorial de Samoa Occidental. Myanmar, Angola y Ghana también están considerando la posibilidad de establecer nuevos bancos públicos nacionales de desarrollo [de Luna-Martínez *et al.*, 2018: 15].

No todos estos nuevos bancos públicos tienen un mandato de WSS o de infraestructura. Muchos de los que lo hacen han adoptado un enfoque de Asociación Público-Privada, algunos de ellos se han establecido explícitamente como bancos comerciales con el objetivo de conceder préstamos a empresas privadas y movilizar fondos privados para el financiamiento de servicios públicos; un ejemplo de ello es el nuevo Banco de Infraestructura de Canadá [Whiteside, 2018; Loxley y Haier, 2019]. En otras palabras, no hay nada inherentemente “público” en los bancos públicos o en sus funciones; más bien, estas instituciones financieras públicas “dinámicas” son moldeadas y remodeladas por las relaciones de poder, el contexto más amplio, las fuerzas sociales, su estructura institucional y las prioridades de gobierno [Marois y Güngen, 2016; UNCTAD, 2019; Marois, en prensa].

Sin embargo, muchos bancos públicos tienen mandatos explícitos para financiar los servicios de agua, y algunos lo han hecho durante décadas. El Nederlandse Waterschapsbank NV (NWB), por ejemplo, se formó en 1954 con el único mandato de otorgar préstamos a las autoridades públicas del agua del país. Su misión es “ayudar a los clientes a crear valor añadido para la sociedad”; también tiene una agenda de inversión sostenible que es “el elemento clave de la misión del NWB” e incluye “la adaptación al

[§] Nota del Traductor: SFIL es un banco público de desarrollo, con el objetivo de garantizar la estabilidad del financiamiento del sector público local en Francia.

clima, la mitigación del clima y la mejora de la biodiversidad”. El NWB tiene como objetivo “mantener los costos de financiamiento del sector público lo más bajos posible” a través de sus propias operaciones eficientes y aprovechando sus “calificaciones AAA/Aaa para recaudar fondos de manera económica y sostenible” [NWB, 2018: 27]. En 2018, concedió 7.4 mil millones de euros en nuevos préstamos para diversas infraestructuras relacionadas con el agua en Países Bajos.

El Kreditanstalt für Wiederaufbau alemán (KfW) es otro ejemplo. Fundado en 1948 como parte del Plan Marshall para la reconstrucción de la Europa de posguerra, el KfW ha ampliado desde entonces su alcance de actividades a una amplia gama de mandatos sociales, de infraestructura y ecológicos, así como a la concesión de préstamos a países de bajos ingresos de todo el mundo [Deeg, 1999; Naqvi *et al.*, 2018]. Con una base de activos de 485.000 millones de euros en 2018, KfW es la tercera institución bancaria más grande de Alemania [KfW, 2019]. El agua y el saneamiento son una parte importante de su cartera de préstamos en el país y en el extranjero; financia proyectos tan diversos como agua para los campos de refugiados en Jordania, inodoros de compostaje en Alemania e iniciativas para promover el derecho humano al agua [KfW, s.f.]. No se dispone de cifras acumuladas sobre su nivel de financiación del agua, pero el sector de Energía, Energías Renovables y Agua de KfW está creciendo. Su compromiso con las formas sostenibles de infraestructura ha sido particularmente evidente en el papel que ha desempeñado en el cambio a las energías renovables en Alemania durante los últimos 15 años, lo que también ha servido para poner de relieve la capacidad de los bancos públicos para reorientar sus mandatos a lo largo del tiempo [Marois, 2017; KfW, 2019].

ES NECESARIA UNA NUEVA AGENDA DE INVESTIGACIÓN

Este papel (potencial) de los bancos públicos en el financiamiento del agua y el saneamiento no ha pasado desapercibido para las organizaciones políticas internacionales. El Consejo Mundial del Agua y la OCDE, por ejemplo, han señalado el aumento de los bancos públicos en los últimos 20 años, notando que “seguirán creciendo” y “seguirán siendo una fuente principal de fondos” para las inversiones en WSS [WWC y OCDE, 2015: 37]; el Banco Mundial también reconoce el “importante papel” que desempeñan los bancos públicos en el desarrollo de la infraestructura en general, señalando que “una mayor comprensión de su papel y métodos operativos es crucial para mejorar su eficacia y contribución al desarrollo” [de Luna-Martínez *et al.*, 2018: 7]. El “Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2019” de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD] dedica un capítulo completo a las alternativas de los bancos públicos, señalando tanto el renacimiento contemporáneo de estas instituciones como la necesidad de alternativas públicas eficaces frente a las limitadas respuestas privadas a la financiación de los ODS [UNCTAD, 2019: Capítulo VI].

A pesar de que cada vez se reconoce más la necesidad de realizar más investigaciones comparativas y basadas en datos empíricos sobre los bancos públicos, ha habido poco seguimiento. El Banco Mundial, por ejemplo, ha pedido que se realice un “estudio sistemático y exhaustivo de los bancos públicos nacionales”, pero su labor hasta la fecha se ha limitado a dos estudios de una pequeña proporción de bancos públicos; estas encuestas se basaron en cuestionarios cuantitativos que decían poco sobre la participación de los bancos públicos en la financiación del WSS [de Luna-Martínez *et al.*, 2018: 10; de Luna-Martínez y Vicente, 2012].

Como resultado, los bancos públicos son en gran medida ignorados o marginados en la literatura sobre el financiamiento de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento ambiental, incluso en la mayoría de los artículos citados en este artículo. Un documento de cuarenta y ocho páginas sobre el financiamiento de WSS por parte del Banco Mundial y UNICEF [2017] titulado “¿Cómo se puede llenar la brecha de financiamiento?” no hace ni una sola referencia a los bancos públicos; un informe de doscientas un páginas de las Naciones Unidas sobre “Financiamiento para el desarrollo” dedicó solo un párrafo al tema, mientras que la mayor parte del informe se dedicó a explorar cómo "los países deben seguir trabajando para crear entornos empresariales competitivos y desarrollar carteras de proyectos y proyectos invertibles" para el financiamiento privado [IATF, 2018: 61].

La investigación que analiza los bancos públicos tiende a centrarse en sus trampas más que en sus perspectivas; a menudo se les tacha de “escleróticos”, “atrasados”, “ineficientes” y “corruptos” [*The Economist*, 2019; La Porta *et al.*, 2002; Calabria, 2015]. Informes recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial admiten que los bancos públicos nacionales son relevantes, pero en su mayor parte su estado de ánimo es negativo; la mayor parte del comentario se centra en preocupaciones que incluyen “préstamos en mora que socavan su solvencia y rentabilidad a largo plazo”, “miembros independientes de los consejos de administración [que] son limitados o inexistentes”, la falta de un “mandato de desarrollo bien definido”, “el desplazamiento de otros participantes en el mercado”, una “falta de herramientas y capacidad analítica para evaluar su impacto económico y de desarrollo”, y tasas de préstamo que no están determinadas por las fuerzas del mercado [de Luna-Martínez *et al.*, 2018: 6-7, 45; cf. Cull *et al.*, 2017]. A pesar de que los préstamos a los bancos públicos han aumentado durante la crisis de la COVID-19, el Monitor Fiscal del FMI de 2020 repite estas mismas

opiniones “políticas”, reconociendo la necesidad de los bancos públicos en el proceso de recuperación, pero criticándolos por ofrecer rendimientos inferiores a los de los bancos privados [IMF, 2020: capítulo 3].

Sin duda, muchos bancos públicos han sido víctimas de problemas de uso y abuso por parte de las élites, así como de procedimientos operativos deficientes. Como señala el Instituto Roosevelt en sus esfuerzos por promover los bancos públicos de propiedad municipal en los Estados Unidos, las preocupaciones sobre los riesgos de corrupción e ineficiencia

debe abordarse con rigor. En particular, es necesario garantizar que [los bancos públicos] no se vean atrapados por "intereses internos" que puedan dirigir recursos hacia proyectos que no se ajusten a [sus] objetivos fundacionales o que lleven a cabo actividades crediticias de alto riesgo, erosionando las normas de suscripción requeridas [Beitel, 2016: 9].

La investigación también ha señalado preocupaciones sobre las formas en que los políticos han utilizado los bancos públicos no para beneficio personal, sino para una transformación estructural impulsada ideológicamente, en particular para ayudar a forzar transiciones al neoliberalismo que de otro modo serían impopulares [Marois y Güngen, 2016].

Sin embargo, en lugar de asumir lo peor, es decir, evocar imágenes de gerentes y élites egoístas jugando con el sistema sin los controles y equilibrios de las fuerzas del mercado, los defensores de los bancos públicos señalan el potencial de "hacer cumplir los mandatos sociales, políticos, económicos y ambientales" [Beitel, 2016: 9]. No se trata de apoyar ciegamente a los bancos públicos simplemente porque son públicos; la propiedad pública no determina el funcionamiento de las instituciones, pero sí abre posibilidades alternativas. Es necesario repensar lo que significa "público" en un esfuerzo por mejorar la transparencia, aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones y desarrollar

mandatos más claros para mejorar el bien público a través de las finanzas públicas [Romero, 2017; Steinfort y Kishimoto, 2019].

LOS BENEFICIOS POTENCIALES DE LOS BANCOS PÚBLICOS

A pesar de este sesgo, hay muchos beneficios potenciales de que los bancos públicos desempeñen un papel más importante en la financiación de WSS (y otros sectores). Además de los ejemplos de bancos públicos reales que financian el agua pública, como se ha descrito en breve anteriormente, la literatura destaca una amplia gama de posibles beneficios a favor del público. Los resumimos aquí en tres categorías: desfinanciarización, descarbonización y democratización [Marois, en prensa].

Desfinanciarización

Si la financiarización tiene que ver con imperativos de alto rendimiento a corto plazo, entonces la desfinanciarización tiene que ver con la posibilidad de que los bancos públicos mitiguen y reviertan esta tendencia [Bayliss, 2014; Karwowski, 2019; Loftus *et al.*, 2019]. En primer lugar, debido a que los bancos públicos están protegidos por la esfera pública, no necesitan, y a menudo no lo hacen, operar de acuerdo con un motivo de maximización de ganancias (aunque pueden, por supuesto, si se les ordena hacerlo); en cambio, se orientan más a menudo hacia un mandato de desarrollo o una misión de “financiación paciente” [Micco *et al.*, 2007; McCarthy *et al.*, 2016; Barrowclough y Gottschalk, 2018; Griffith-Jones y Ocampo, 2018; Mazzucato y Macfarlane, 2019]. Esta simple diferencia permite a los bancos públicos llevar a cabo toda una serie de actividades que son contrarias a la financiarización. Pueden, por ejemplo, actuar de forma anticíclica, es decir, pueden prestar en una crisis financiera cuando los tiempos son malos y en un momento en que los bancos privados se están restringiendo [Brei y Schclarek, 2013]; en contraste con los flujos de financiamiento privados más volátiles, los bancos

públicos también pueden privilegiar los préstamos estables y a largo plazo [Griffiths y Romero, 2018]. Por último, al centrarse en el proyecto y el mandato, los bancos públicos pueden coordinar mejor los préstamos para reducir el costo de los préstamos y generar ahorros de costos para las autoridades gubernamentales [ALIDE, 2018: 17]; esta capacidad está vinculada a la forma en que los bancos públicos se benefician de las garantías soberanas, lo que reduce el costo de sus préstamos en los mercados financieros.

Mediante el uso de un sistema de reserva fraccionaria, es decir, préstamos por encima de las reservas reales de efectivo mantenidas, los bancos públicos también pueden ofrecer una poderosa ventaja fiscal a las autoridades estatales [von Mettenheim, 2010]. Esto puede disminuir la dependencia de los flujos de capital a corto plazo y puede reducir el poder monopólico de los grandes bancos [Kodrzycki y Elmatad, 2011]. Los bancos públicos también son expertos en la integración espacial; a través de las redes de sucursales nacionales y sus mandatos de desarrollo regional y nacional, son capaces de vincular la ciudad y el campo, así como las regiones ricas y pobres en capital [Myrdal, 1963; Marois, 2012; ALIDE, 2018].

El hecho de que los bancos públicos suelen operar con arreglo a leyes específicas del sector público también significa que a menudo deben seguir normas operativas y directrices de presentación de informes claras; estas normas restringen, aunque no eliminan por completo, la especulación por parte de la administración de los bancos públicos utilizando los recursos del banco. En cambio, la actividad del banco está orientada hacia las prioridades nacionales y, de esta manera, pueden ayudar a desarrollar la experiencia financiera dentro y para el sector público. El Banco Nacional para la Agricultura y el Desarrollo Rural de la India, por ejemplo, proporciona servicios financieros y regulatorios especializados para el gobierno, al tiempo que

canaliza el capital de las regiones ricas en capital a las regiones pobres en capital [NABARD, 2019].

Descarbonización

El potencial de los bancos públicos quizás no sea más urgente que en la agenda global de descarbonización. El acuerdo generalizado en torno al fracaso de los bancos privados para resolver la crisis climática ha dejado espacio para que el papel potencialmente catalizador de los bancos públicos responda de formas nuevas e innovadoras. Los bancos públicos, en particular, han demostrado la capacidad de responder, reestructurarse y reorientarse en línea con el reto de la descarbonización [Mazzucato y Semieniuk, 2017; Marois, en prensa]. La evidencia empírica apunta a cómo "los inversionistas públicos están desempeñando un papel cada vez más importante en la financiación del despliegue de tecnologías de energías renovables y son la única razón por la que la financiación de activos de energías renovables ha experimentado algún crecimiento entre el inicio de la crisis financiera de 2008 y 2014" [Mazzucato y Semieniuk, 2018: 14]. No se ha estudiado su potencial para desarrollar prácticas más neutras en carbono en el sector del agua; sin embargo, un estudio más profundo podría revelar las posibles ventajas ecológicas derivadas de la financiación de los servicios de agua y saneamiento por parte de los bancos públicos que no se demuestran en las prácticas tradicionales de las "grandes infraestructuras".

Democratización

Los bancos públicos ofrecen el potencial para la democratización, es decir, para que la sociedad tenga una voz significativa sobre cómo se utilizan los recursos financieros; de hecho, la gobernanza democratizada puede ser la fuerza causal detrás de las operaciones desfinanciarizadas y descarbonizadoras de los bancos públicos. La democratización es un proceso que puede, entre otras cosas, impulsar la gobernanza, la innovación y la inclusión social mediante la internalización del interés público y la movilización

hacia las prioridades sociales identificadas. La democratización de las finanzas es una demanda central y recurrente de académicos y grupos comunitarios críticos con el capitalismo financiarizado; se destaca, por ejemplo, en el texto central de la propuesta del Nuevo Trato Verde (*Green New Deal*) que está siendo defendida por un número creciente de políticos estadounidenses y en la elaboración del nuevo Banco Nacional de Inversiones de Escocia [Bernasconi-Osterwalder y Hunter, 2002; Bracking, 2016; Romero, 2017; Brown, 2019; Mazzucato y Macfarlane, 2019].

Los bancos públicos *pueden* tener un enfoque público incluso en el contexto de las presiones estructurales e ideológicas neoliberales. Este potencial se evidencia en el poco conocido Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) que se creó en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Si bien muchos acuerdos paralelos del TLCAN (como la Comisión para la Cooperación Ambiental) han tendido a institucionalizar y reprimir la disidencia socioeconómica [Marois, 2009], el BDAN fue diseñado con el propósito de enfrentar problemas sociales y ambientales a través del desarrollo de nueva infraestructura [Carter y Ortolano, 2000: 691]. De acuerdo con Hinojosa-Ojeda [1994: 301-2], el BDAN era un “nuevo tipo de institución diseñada para la planeación regional de base democrática”; fue una respuesta de abajo hacia arriba a la problemática “falta de foros democráticos y participativos en las comunidades locales” entre las comunidades fronterizas entre México y Estados Unidos [ibid.]. Sus operaciones se centran en gran medida en la infraestructura, en particular en WSS; de 1995 a 2018, el banco apoyó 57 proyectos de abastecimiento de agua, 91 proyectos de alcantarillado, 24 proyectos de conservación de agua y tres proyectos de drenaje pluvial a lo largo de la región fronteriza [BDAN, s.f.]. Con el fin de ayudar a desarrollar proyectos en comunidades donde de otra manera no se habría dispuesto de los fondos necesarios (públicos o privados), el BDAN emplea una combinación de préstamos asequibles (incluyendo

préstamos a tasas concesionarias inferiores a las del mercado), donaciones oficiales y cierta inversión del sector privado. También proporciona asistencia técnica a las empresas de servicios públicos, las autoridades estatales y locales y otros patrocinadores de proyectos para garantizar la sostenibilidad y la viabilidad financiera.

El BDAN trabaja en conjunto con la Comisión de Cooperación Ambiental Fronteriza (BECC, por sus sigla en inglés) en la selección de proyectos y decisiones de financiamiento [Carter y Ortolano, 2000: 693]. Tanto el BDAN como la BECC aceptan que los proyectos deben contar con la participación pública en la fase de desarrollo y estar sujetos a control local a partir de entonces. Dentro del propio BDAN, las decisiones sobre el financiamiento recaen en el Consejo Directivo de 10 miembros; esto incluye a cinco miembros estadounidenses y cinco mexicanos, y el presidente se alterna anualmente entre países. La mayoría de los miembros del Consejo son representantes del gobierno, aunque su composición a mediados de 2019 incluía personal de dependencias gubernamentales y nombramientos académicos [BDAN, s.f.]. Las evaluaciones iniciales de los procesos de toma de decisiones destacaron la importancia de la estructura más amplia del BDAN y del Comité Asesor de la BECC para facilitar los aportes de abajo hacia arriba de los gobiernos locales, los grupos comunitarios y el sector privado: “Esta estructura de gobierno participativo del BDAN y la BECCF es parte integral de la misión de estas instituciones: desarrollar un nuevo tipo de entidad financiera pública receptiva” [Hinojosa-Ojeda, 1994: 303]. La investigación de Carter y Ortolano [2000] subraya la importancia de dicha participación comunitaria, pero también sugiere que se podría hacer más.

DESAFÍOS POR DELANTE

Dejando a un lado las ventajas potenciales, es importante preguntarse también ¿de dónde saldrá el dinero para los bancos

públicos? El primer punto a tener en cuenta es que, como se ha señalado anteriormente, ya tienen grandes sumas de fondos disponibles y, por lo tanto, podrían tener un impacto significativo en las inversiones de WSS en un plazo relativamente corto. Los gobiernos también pueden canalizar más fondos directos a través de los bancos públicos, que estos bancos a su vez pueden ampliar a través del sistema de reserva fraccionaria, prestando entre dos y diez veces el capital inyectado. Al desarrollar su propia capacidad y su propia masa de capital a lo largo del tiempo, los bancos públicos pueden financiar el agua pública utilizando su propio capital. Al mismo tiempo, los subsidios otorgados a industrias contaminantes como el petróleo y el gas pueden reorientarse a proyectos que cumplan con los ODS. En los países de bajos ingresos, los bancos públicos nacionales y regionales pueden ser conductos eficaces para la ayuda internacional para el desarrollo y las donaciones, así como para obtener préstamos directamente de los bancos multilaterales y de los grandes bancos de desarrollo en condiciones favorables, ampliando y canalizando así los recursos internacionales hacia proyectos locales de abastecimiento de agua y saneamiento. Los bancos públicos con calificaciones crediticias suficientemente sólidas también pueden acceder a los mercados de capitales nacionales y extranjeros.

También existe un enorme margen para aprovechar estratégicamente otros fondos públicos dentro de la esfera pública, por ejemplo, de los bancos centrales, los fondos soberanos, los fondos de pensiones, las aseguradoras y los propios servicios públicos y empresas (ya sea a través de inversiones o mediante el mandato de los bancos públicos como instituciones depositarias del sector público). Estas formas de obtener capital no son exóticas, son una práctica estándar. No cabe duda de que hay más opciones y nuevas formas innovadoras de abastecerse de flujos de capital recurrentes; estos pueden incluir gravámenes de ciertos servicios, impuestos sobre la elusión fiscal, flujos de ingresos por impuestos al carbono y mecanismos de quien contamina paga,

todos los cuales ya están siendo discutidos en los círculos de política internacional [Romero, 2017; OCDE, 2017].

También es importante preguntarse ¿cómo reaccionarán los bancos públicos ante una nueva generación emergente de operadores públicos de agua que están haciendo de la rendición de cuentas, la transparencia, la participación y la equidad social una prioridad y que están abriendo la toma de decisiones a una amplia franja de ciudadanos, centrándose en los subsidios para los hogares de bajos ingresos e insistiendo en mandatos de equidad más fuertes? [McDonald y Ruiters, 2012; Kishimoto *et al.*, 2017]. Muchos de estos operadores públicos de agua están a la vanguardia de un creciente movimiento global a favor del público; este movimiento a menudo está siendo impulsado desde cero por una amplia gama de grupos de ciudadanos que desconfían de la participación del Estado y tienen opiniones negativas sobre el sector financiero [Beck, 2018]. ¿Cómo responderán los bancos públicos a estas demandas de cambio más radicales, particularmente en el sector del agua, donde los llamamientos a mejores formas de publicidad han sido particularmente fuertes? ¿En qué medida podrán aprender unos de otros y compartir prácticas con otras instituciones públicas?

De particular interés es la cuestión sobre ¿cómo responderán los bancos públicos a la creciente tendencia hacia la remunicipalización? En los últimos 20 años, en más de 40 países, se han producido al menos 311 casos de remunicipalización de WSS, que han afectado a más de 100 millones de personas [Kishimoto *et al.*, 2017, 2020]. La tendencia parece estar acelerándose y hay cientos de municipios en todo el mundo que tomarán decisiones durante la próxima década sobre si renovar o no los contratos del sector privado, y algunos municipios optan por rescindir los contratos antes de tiempo, incluso si al hacerlo incurren en una multa [Umler y Gerlak, 2019].

La remunicipalización puede ser costosa, y la ciudad de Berlín es un buen ejemplo. En 2011, una coalición de activistas forzó un referéndum sobre la remunicipalización en esa ciudad, exigiendo mayor transparencia y equidad social a un proveedor público de agua. El referéndum tuvo éxito, pero las disputas legales y la presión del capital privado obligaron al municipio a recomprar las acciones privadas de los proveedores de agua a un costo de 30 mil millones de euros; esta readquisición de activos públicos se pagará a través de facturas de agua más altas durante los próximos 30 años, “poniendo en duda la sostenibilidad de las operaciones de agua [y] amenazando con socavar las aspiraciones de la Mesa del Agua de Berlín de tarifas asequibles y socialmente equitativas” [Lobina, 2017: 155]. ¿Hasta qué punto los bancos públicos podrían haber desempeñado un papel en este cambio y hasta qué punto están dispuestos a participar en luchas de remunicipalización en otros lugares?

Conclusión

Desafortunadamente, nadie conoce las respuestas a estas y muchas otras preguntas sobre los bancos públicos que financian el agua pública; simplemente no se ha llevado a cabo la investigación cuantitativa, cualitativa y comparativa requerida. La fijación de muchas organizaciones políticas internacionales en las desventajas de los bancos públicos “ha llevado a relativamente poca investigación y conocimiento” sobre su potencial positivo. En lugar de “descartar categóricamente el financiamiento público porque algunos de los proyectos fracasan”, es importante preguntarse cómo pueden ser las “políticas bien diseñadas para el financiamiento público” [Mazzucato y Semieniuk, 2017: 43].

Un mejor conocimiento sobre el papel de los bancos públicos en la financiación del agua pública solo se logrará con una investigación amplia, multifacética y multiescalar. Dada la diversidad de las necesidades de WSS, así como la variedad de operadores de agua y los diversos significados del agua en todo el mundo, nunca habrá

un tipo “ideal” de banco público para financiar el agua pública, ni las relaciones entre el banco público y el agua pública permanecerán constantes a lo largo del tiempo. Es necesario desarrollar una comprensión de las mejores prácticas y crear una mejor conciencia política de los pros y los contras de la financiación bancaria pública. Se requiere una evaluación más sistemática y cualitativa de cómo los bancos públicos existentes están trabajando con los operadores públicos de agua, que examine diferentes contextos, diferentes mandatos operativos y diferentes resultados.

En el proceso, los bancos públicos existentes tendrán que abrirse a un escrutinio más minucioso y estar preparados para evaluaciones críticas que vayan más allá de los indicadores cuantitativos de rendimiento basados en gran medida en el mercado que han dominado sus evaluaciones comparativas internas y externas hasta la fecha [La Porta *et al.*, 2002; Cull *et al.*, 2017]. Del mismo modo, los operadores públicos de agua deben estar dispuestos a reevaluar sus propias prácticas de endeudamiento y a compartir experiencias positivas y negativas con los bancos públicos; también deben estar dispuestos a explorar nuevas formas de colaborar con los bancos públicos y otras instituciones de servicio público para ampliar el alcance de lo que significa ser “público”.

Es posible que los bancos públicos no sean una panacea para resolver la crisis mundial de los servicios de agua y saneamiento; sin embargo, podrían desempeñar un papel mucho más importante en la provisión de financiación sostenible y estable para uno de los desafíos mundiales más urgentes de nuestro tiempo. Al hacerlo, los bancos públicos podrían desempeñar un papel formativo en la remodelación del futuro de los servicios públicos de agua; también podrían ayudar a responder a la crisis climática y, sin duda, a la crisis de la Covid-19 y futuras pandemias. Además, los operadores públicos progresistas de agua podrían extender sus nuevos principios de compromiso democrático y equidad a los bancos públicos de ideas afines, ayudando así a revertir una tendencia de

larga data según la cual las finanzas dictan el carácter de los servicios de agua y no al revés.

Referencias

- Advani, R. [2016]. *Scaling up blended financing of water and sanitation investments in Kenya*. Knowledge Note: Kenya, World Bank, Washington, DC.
- Ajami, N.; Habicht, H.; Fewell, B.; Lattimer, T. y Ng, T. [2018]. *Water finance: The imperative for water security and economic growth*. Stanford University: Standford.
https://waterinthewest.stanford.edu/sites/default/files/water_finance_water_security_economic_growth.pdf (consultado el 02 de julio de 2019).
- Alaerts, G.J. [2019]. Financing for water – Water for financing: A global review of policy and practice. *Sustainability*, 11(3): 821.
- ALIDE. [2018]. *Innovación financiera para el desarrollo local y territorial*. San Isidro, Perú: Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE).
- Andrianova, S.; Demetriades, P. y Shortland, A. [2012]. Government ownership of banks, institutions and economic growth. *Economica* 79 (315): 449-469.
- Arup. [2015]. *inDepth Water Yearbook: Your Guide to Global Water Industry Data: 2014-15*, Arup, www.spml.co.in/Download/Reports/in-depth-water-year-book-2014-2015.pdf (fecha de consulta 01 de noviembre de 2028).
- Asian Development Bank. [2017]. *Catalyzing green finance: A concept for leveraging blended finance for green development*. Manila: ADB.
www.adb.org/publications/green-finance-catalyzing-facility
- Bakker, K.J. [2010]. *Privatizing water: Governance failure and the world's urban water crisis*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Banco Mundial y UNICEF. [2017]. *Water and sanitation for all: How can the financing gap be filled? Discussion Paper submitted to support the Sanitation and Water for All Finance Minister Meeting Preparatory Process, March*,
<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26458/114>

- [545-WP-P157523-PUBLIC-SWACountry-Preparatory-Process-Discussion-Paper-8-Mar-17.pdf](#) (fecha de consulta 19 de mayo de 2019)
- Banco Mundial. [2017]. *Reducing inequalities in water supply, sanitation, and hygiene in the era of the sustainable development goals: Synthesis report of the WASH poverty diagnostic initiative*. World Bank Group: Washington, DC;
<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27831/w17075.pdf?sequence=5&isallowed=y> (fecha de consulta 19 de mayo de 2019)
- Banco Mundial. [2020]. *Considerations for financial facilities to support water utilities in the COVID-19 crisis*. World Bank, Washington, DC.
- Bank of America. [n.d.]. *Solving the world's safe water problem*.
<https://about.bankofamerica.com/en-us/what-guides-us/solving-the-worlds-safe-water-problem.html#fbid=78NUefskafD> (fecha de consulta 15 de agosto de 2019)
- Barlow, M. y Clarke, T. [2017]. *Blue gold: The battle against corporate theft of the world's water*. Routledge: New York.
- Barrowclough, D. y Gottschalk, R. [2018]. Solidarity and the South: Supporting the new landscape of long-term development finance. *UNCTAD Research Paper*, No. 24 UNCTAD/SER.RP/2018/6.
<https://unctad.org/en/pages/publicationwebflyer.aspx?publicationid=2233> (fecha de consulta 29 de junio de 2020)
- Barth, J.R.; Caprio, G. Jr. y Levine, R. [2006]. *Rethinking bank regulation: Till angels govern*. New York: Cambridge University Press.
- Bartram, J.; Brocklehurst, C.; Bradley, D.; Muller, M. y Evans, B. [2018]. Policy review of the means of implementation targets and indicators for the sustainable development goal for water and sanitation. *npj Clean Water* 1(3).
- Bauby, P. [2014]. Water globalization: The strategies of the two French "majors". In Schneider-Madanés, G. (Ed), *Globalized water*, pp. 45-61. Dordrecht, Netherlands: Springer Dordrecht.
- Bayliss, K. [2014]. *The financialization of water. Review of Radical Political Economics* 46(3): 292-307.
- Beck, A. [2018]. Water operator partnerships: Peer learning and the politics of solidarity in water and sanitation service provision. *WIREs Water* 6(1): e1234.

- Beitel, K. [2016]. *Municipal banking: An overview*. Roosevelt Institute: New York. <https://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2016/04/municipal-banking-an-overview.pdf> (fecha de consulta 12 de mayo de 2018)
- Benn, J.; Sangaré, C. y Hos, T. [2017]. *Amounts mobilised from the private sector by official development finance interventions: Guarantees, syndicated loans, shares in collective investment vehicles, direct investment in companies, credit lines*. OECD Development Co-operation Working Papers No. 36. Paris: OECD Publishing, <https://doi.org/10.1787/8135abde-en> .
- Bernasconi-Osterwalder, N. y Hunter, D. [2002]. Democratizing multilateral development banks. In Brunch, C. (Ed), *The new "public": The globalization of public participation*, pp. 151-165. Washington, DC: Environmental Law Institute.
- Berry, C. y Macfarlane, L. [2019]. A new public banking ecosystem: A report to the Labour Party commissioned by the Communication Workers Union and The Democracy Collaborative, Labour Party, <http://labour.org.uk/wp-content/uploads/2019/03/Building-a-new-public-banking-ecosystem.pdf> (fecha de consulta junio 2019)
- Bracking, S. [2016]. *The financialisation of power: How financiers rule Africa*. Milton Park, Abingdon, Oxon, UK: Routledge.
- Brei, M. y Schclarek, A. [2013]. Public bank lending in times of crisis. *Journal of Financial Stability* 9(4): 820-830.
- Brown, E. [2019]. *Banking on the people: Democratizing money in the digital age*. Washington, DC: The Democracy Collaborative.
- Calabria, M. [2015]. Promises of public banks don't match reality. *American Banker*, March, www.americanbanker.com/opinion/promises-of-public-banks-dont-match-reality (fecha de consulta 28 de mayo de 2019)
- Calomiris, C.W. y Haber, S. [2014]. *Fragile by design: Banking crises, scarce credit, and political bargains*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Carter, N. y Ortolano, L. [2000]. Working toward sustainable water and wastewater infrastructure in the US-Mexico border region: A perspective on BECC and NAD Bank. *International Journal of Water Resources Development* 16(4): 691-708.

- Castro, J.E. [2008]. Neoliberal water and sanitation policies as a failed development strategy: Lessons from developing countries. *Progress in Development Studies* 8(1): 63-83.
- Cotruvo, J.; Craun, G.F. y Hearne, N. (Eds). [2018]. *Providing safe drinking water in small systems: Technology, operations, and economics*. Routledge: New York
- Cox, A. y Borkey, P. [2015]. Challenges and policy options for financing urban water and sanitation. In Aguilar-Barajas, I.; Mahlkecht, J.; Kaledin, J; Kjellén, M. and Mejía-Betancourt, A. (Eds), *Water and cities in Latin America, challenges for sustainable development*, pp. 46-67. Earthscan: London.
- Cull, R.; Martínez Peria, M.S. y Verrier, J. [2017]. Bank ownership: Trends and implications. *IMF Working Paper* WP/17/60. Washington, DC: International Monetary Fund.
- de Luna-Martínez, J. y Vicente, C.L. [2012]. *Global survey of development banks*. World Bank: Washington, DC.
<https://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-5969> (fecha de consulta 4 de junio de 2019)
- de Luna-Martínez, J.; Vicente, C.L.; Arshad, A.B.; Tatucu, R. y Song, J. [2018]. *2017 Survey of National development banks (English)*. Washington, DC: World Bank Group.
- Deeg, R.E. [1999]. *Finance capitalism unveiled: Banks and the German political economy*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Demirgüç-Kunt, A. y Detragiache, M.E. [2010]. *Basel core principles and bank risk: does compliance matter?* No. 10-81. Washington, DC: International Monetary Fund.
- The Economist*. [2019]. “Hindu Juggernaut”. *The Economist*, May 25-31, p5.
- FiC. [2020]. *Finance in common: The first global summit of Public Development Banks*. Conference Booklet.
<https://wfdfi.net/2020/04/29/finance-in-common-2020-booklet-featuring-information-about-the-summit-and-public-development-banks/> (fecha de consulta 24 de julio de 2020)
- GLAAS (UN-Water Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water). [2017]. *UN Water-GLAAS 2017: Financing Universal Water, Sanitation and Hygiene under the Sustainable Development*

- Goals*. Geneva: United Nations, www.unwater.org/publications/un-water-glaas-2017-financing-universal-water-sanitation-hygiene-sustainable-development-goals/ (fecha de consulta 12 de noviembre de 2018)
- Griffith-Jones, S. y Ocampo, J.A. (Eds). [2018]. *The future of national development banks*. Oxford: Oxford University Press.
- Griffiths, J. y Romero, M.J. [2018]. *Three compelling reasons why the G20's plan for an infrastructure asset class is fundamentally flawed*. Brussels: Eurodad.
- Hall, D. [2015]. Why public-private partnerships don't work: The many advantages of the public alternative. Public Services International Research Unit, www.world-psi.org/sites/default/files/rapport_eng_56pages_a4_lr.pdf
- Hinojosa-Ojeda, R. [1994]. The North American Development Bank: Forging new directions in regional integration policy. *Journal of the American Planning Association* 60(3): 301-304.
- Hutton, G. [2016]. Can we meet the costs of achieving safely managed drinking-water, sanitation and hygiene services under the new sustainable development goals? *Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development* 6(2): 191-194.
- IATF (Inter-Agency Task Force on Financing for Development). [2018]. *Financing for development: Financing for development: Progress and prospects 2018*. New York: United Nations.
- IATF (Inter-Agency Task Force on Financing for Development). [2019]. *Financing for Development Report 2019*. New York: United Nations.
- IFC (International Finance Corporation) [2017]. *DFI Working Group on Blended Concessional Finance for Private Sector Projects*. Washington: World Bank Group.
- Ikeda, J. y Liffiton, K. [2019]. *Fintech for the water Sector: Advancing financial inclusion for more equitable access to water*. World Bank, Washington, DC.
- IMF. [2020]. *Fiscal monitor: Policies to support people during the COVID-19 pandemic*. Washington: International Monetary Fund.
- Jägerskog, A.; Lexén, K.; Clausen, T.J. y Engstrand-Neacsu, V. [2016]. *The Water Report 2016*. Stockholm International Water Institute.

- Karwowski, E. [2019]. Towards (de-)financialisation: The role of the state. *Cambridge Journal of Economics* 43(4): 1001-27.
- KfW Bank aus Verantwortung. [n.d]. Dossier Water. www.kfw.de/stories/dossier-wasser-2.html (fecha de consulta 15 de agosto de 2019)
- KfW. [2019]. Financial Report 2018. www.kfw.de/PDF/Download-Center/Finanzpublikationen/PDF-Dokumente-Berichte-etc/1_Gesch%C3%A4ftsberichte/KfW_Finanzbericht_2018-2.pdf (fecha de consulta 3 de junio de 2019)
- Kishimoto, S.; Petitjean, O. y Steinfort, L. [2017]. *Reclaiming public services: How cities and citizens are turning back privatization*. Amsterdam: TNI.
- Kishimoto, S.; Steinfort, L. y Petitjean, O. [2020]. *The future is public: Towards democratic ownership of public services*. Transnational Institute: Amsterdam.
- Kodrzycki, Y.K. y Elmatad, T. [2011]. *The Bank of North Dakota: A model for Massachusetts and other states?* Boston: Federal Reserve Bank of Boston.
- Kolker, J.; Kingdom, B.; Trémolet, S.; Winpenny, J. y Cardone, R. [2016]. *Financing options for the 2030 water agenda*. Knowledge Brief, November. World Bank Group: Washington, DC.
- Kumari, A. y Sharma, A.K. [2017]. Infrastructure financing and development: A bibliometric review. *International Journal of Critical Infrastructure Protection* 16: 49-65.
- La Porta, R.; Lopez-de-Silanes, F. y Shleifer, A. [2002]. Government ownership of banks. *The Journal of Finance* 57(1): 265-301.
- Lazonick, W. y Shin, J.-S. [2020]. *Predatory value extraction: How the looting of the business corporation became the US norm and how sustainable prosperity can be restored*. Oxford University Press.
- Leigland, J.; Trémolet, S. e Ikeda, J. [2016]. *Achieving universal access to water and sanitation by 2030: The role of blended finance*. World Bank.
- Le Strat, A. [2014]. Discussion – The remunicipalisation of Paris’s water supply service: A successful reform. *Water Policy* 16(1): 197-204.
- Lobina, E. [2017]. Water remunicipalisation: Between pendulum swings and paradigm advocacy. In Bell, S.; Allen, A.; Hofmann, P. and The,

- T.H. (Eds), *Urban water trajectories*, pp. 149-161. Basel, Switzerland: Springer International Publishing.
- Loftus, A.; March, H. y Purcell, T.F. [2019]. The political economy of water infrastructure: An introduction to financialization. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water* 6(1), e1326.
- Loxley, J. y Hajer, J. [2019]. Public-private partnerships, social impact bonds, and the erosion of the state in Canada. *Studies in Political Economy* 100(1): 18-40.
- Mazzucato, M. [2018]. *The value of everything: making and taking in the global economy*. London: Penguin-Allen Lane.
- Marcelin, I. y Mathur, I. [2015]. Privatization, financial development, property rights and growth. *Journal of Banking & Finance* 50: 528-46.
- Marois, T. [2009]. Un modelo neoliberal para institucionalizar el desacuerdo social: La comisión de cooperación ambiental del TLCAN. *Revista Vetas* (12)31: 57-66.
- Marois, T. [2012]. *States, banks, and crisis: Emerging finance capitalism in Mexico and Turkey*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Marois, T. [2017]. *How public banks can help finance a green and just energy transformation*. Public Alternatives Issue Brief. Amsterdam: TNI. <https://www.tni.org/en/publication/how-public-banks-can-help-finance-a-green-and-just-energy-transformation> (fecha de consulta 14 de junio de 2019)
- Marois, T. [en prensa]. *Public banks: Decarbonisation, definancialisation, and democratisation*. Cambridge University Press: Cambridge.
- Marois, T. y Güngen, A.R. [2016]. Credibility and class in the evolution of public banks: The case of Turkey. *Journal of Peasant Studies* (43)6: 1285-1309.
- Mazzucato, M. y Macfarlane, L. [2019]. *A mission-oriented framework for the Scottish National Investment Bank*. UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Policy Paper (IIPP. WP 2019-02. www.ucl.ac.uk/bartlett/publicpurpose/wp2019-02 (fecha de consulta 14 de julio de 2019)
- Mazzucato, M. y Semieniuk, G. [2017]. Public financing of innovation: New questions. *Oxford Review of Economic Policy* 33(1): 24-48

- Mazzucato, M. y Semieniuk, G. [2018]. Financing renewable energy: Who is financing what and why it matters. *Technological Forecasting & Social Change* 127: 8-22.
- McCarthy, M.A.; Sorsa, V.P. y van der Zwan, N. [2016]. Investment preferences and patient capital: Financing, governance, and regulation in pension fund capitalism. *Socio-Economic Review* 14(4): 751-769.
- McDonald, D.A. [2019]. Will the empire strike back? Powerbrokers and remunicipalisation in the water sector. *Water Alternatives* 12(2): 348-359.
- McDonald, D.A. y Ruiters, G. (Eds). [2012]. *Alternatives to privatization: Options for service delivery in the global south*. New York: Routledge.
- Meeks, P. [2017]. Mixed messages: *The rhetoric and the reality of using blended finance to 'leave no-one behind'*. Brussels: Eurodad.
www.eurodad.org (fecha de consulta 13 de julio de 2019)
- Micco, A.; Panizza, U. y Yanez, M. [2007]. Bank ownership and performance. Does politics matter? *Journal of Banking & Finance* 31(1): 219-241.
- Myrdal, G. [1963. (1957)]. *Economic theory and under-developed regions*. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd.
- NABARD. [2019]. *Annual Report 2018-19*. Mumbai, India: National Bank for Agriculture and Rural Development.
- NADB (North American Development Bank- Banco de Desarrollo de América del Norte) [n.d.a]. *Infrastructure Projects*.
www.nadb.org/ourprojects/infrastructure-projects (fecha de consulta 17 de julio de 2019)
- NADB (North American Development Bank- Banco de Desarrollo de América del Norte) [n.d.b]. *Board of Directors*.
www.nadb.org/about/board-of-directors (fecha de consulta 17 de julio de 2019)
- Naqvi, N.; Henow, A. y Chang, H.J. [2018]. Kicking away the financial ladder? German development banking under economic globalisation. *Review of International Political Economy* 25(5): 672-98.
- NWB (Nederlandse Waterschapsbank NV). [2018]. Annual Report 2018.
www.nwbbank.com/media/uploaded/nwbeng-jaarverslag_2018.pdf
- OCDE. [2015]. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. *Annual survey of large pension funds and public pension*

- reserve funds: Report on pension funds' long-term investments*. Paris: OCDE. www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/2015-large-pension-funds-survey.pdf (fecha de consulta 3 de junio de 2019)
- OCDE. [2017]. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. *Green investment banks: Innovative public financial institutions scaling up private, low-carbon investment*. OCDE Environment Policy Paper No.6. Paris, France: OECD Publishing.
- Orbis. [2020]. Orbis BankFocus. Data update: 24/06/2020 (n° 1843).
- OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) [2017]. *Global Public Investor 2017*. London: Official Monetary and Financial Institutions Forum.
- Romero, M.J. [2017]. *Public development banks: Towards a better model*. Brussels. www.eurodad.org/Public-Development-Banks-towards-a-better-model (fecha de consulta 14 de julio de 2019)
- Scherrer, C. (Ed). [2017]. *Public banks in the age of financialization*. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.
- Schmit, M.; Gheeraert, L.; Denuit, T. y Warny, C. [2011]. *Public financial institutions in Europe*. Brussels: European Association of Public Banks.
- Spronk, S. [2007]. Roots of resistance to urban water privatization in Bolivia: The "new working class", the crisis of neoliberalism, and public services. *International Labor and Working-Class History* 71(1): 8-28.
- Steinfort, L. y Kishimoto, S. (Eds). [2019]. *Public finance for the future we want*. Amsterdam: Transnational Institute. www.tni.org/en/publicfinance (fecha de consulta 2 de junio de 2019)
- Tiemann, M. [2017]. Drinking Water State Revolving Fund (DWSRF): Program overview and issues. *Congressional Research Service Report*, 7-5700, May 3, <https://fas.org/sgp/crs/misc/RS22037.pdf> (fecha de consulta 12 de enero de 2019)
- Umler, R. y Gerlak, A. [2019]. The remunicipalization of water services in the United States. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 61(4): 18-27.
- UNCTAD. [2019]. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. *Trade and development report 2019: Financing a global Green New Deal*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.

- Valdovinos, J. [2012]. The remunicipalisation of Parisian water services: New challenges for local authorities and policy implications. *Water International* 37(2): 107-120
- Veolia. [2016]. Annual and sustainability report 2016: Resourcing the world.
www.veolia.com/sites/g/files/dvc2491/files/document/2017/04/veolia-annual-sustainability-report-2016.pdf (fecha de consulta 12 de noviembre de 2018)
- von Mettenheim, K. [2010]. *Federal banking in Brazil: Policies and competitive advantages*. London: Pickering & Chatto Publishers.
- WHO/UNICEF. [2017]. Progress on drinking water, sanitation and hygiene: Joint Monitoring Programme 2017 update and SDG baselines, UNICEF: Geneva, www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2017/en/ (fecha de consulta 14 de julio de 2019)
- WHO (World Health Organization-Organización Mundial de la Salud). [2020]. Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus: Interim guidance. April 23, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331846/WHO-2019-nCoVIPC_WASH-2020.3-eng.pdf (fecha de consulta 20 de agosto de 2020)
- Whiteside, H. [2018]. Public works: Better, cheaper, faster infrastructure. *Studies in Political Economy* 99(1): 2-19.
- Wu, X.; Schuyler House, R. y Peri, R. [2016]. Public-private partnerships (PPPs) in water and sanitation in India: lessons from China. *Water Policy* 18(S1): 153-176.
- WWC (World Water Council-Consejo Mundial del Agua) y OCDE (Organization for Economic Cooperation and Development). [2015]. Water: Fit to finance? Catalyzing national growth through investment in water security. Paris: WWC y OCDE, www.worldwatercouncil.org/sites/default/files/2017-10/wwc_oecd_water-fit-to-finance_Report.pdf (fecha de consulta 10 de abril de 2019)
- Yalman, G.; Marois, T. y Güngen, A.R. (Eds). [2018]. *The political economy of financial transformation in Turkey*. Abingdon; UK: Routledge.

Recibido 15 de marzo 2024

Aceptado 22 de junio 2024